



CUADRO COMPARATIVO DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A  
LA LEY 975 DE 2005 POR LA LEY 1592 DE 2012

Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
"Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyen de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios"	"Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyen de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"
Artículo 1. Objeto... <b>sin modificación.</b>	
Artículo 2. <i>Ámbito de la Ley, Interpretación y Aplicación Normativa...</i> <b>modificado.</b>  La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.  La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia.  La <u>reinserción</u> a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la <u>Ley 782 de 2002*</u> , se regirá por lo dispuesto en dicha ley.  *(Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones.)	Artículo 1o. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 975 de 2005 el cual quedará así:  Artículo 2°. <i>Ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa.</i> La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, <u>aplicando criterios de priorización en la investigación y el juzgamiento de esas conductas.</u>  La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas Internacionales que regulan esta misma materia.  La <u>reintegración</u> a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con indulto o cualquier otro beneficio jurídico establecido en <u>la Ley 418 de 1997* y las normas que la modifican, prorrogan o adicionan, se regirá por lo dispuesto en dicha ley. La reintegración a la vida civil de quienes se sometan a los procedimientos de que trata la presente ley, se regirá exclusivamente por lo dispuesto en el artículo 66 de ésta.</u>  *(Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.)



Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
Artículo 3. <i>Alternatividad...</i> <b>sin modificación.</b>	
Artículo 4. <i>Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación y Debido Proceso...</i> <b>sin modificación.</b>	
<p>Artículo 5. <i>Definición de Víctima...</i> <b>modificado.</b></p> <p>Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.</p> <p>También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.</p> <p>La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.</p> <p>Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad <u>física</u>, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.</p> <p>Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley.</p>	<p>Artículo 2. Modificación en el sentido de inclusión de párrafo en la parte final.</p> <p>Modifíquese el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p><u>También serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley.</u></p>
<p><b>Nuevo Artículo 5A. <i>Enfoque diferencial.</i></b></p>	<p>Artículo 3. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 5A del siguiente tenor:</p> <p><u>Artículo 5A. Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones</u></p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, la participación de las víctimas en el proceso penal especial de que trata la presente ley, así como el proceso judicial y la investigación que se realice, deberán contar con dicho enfoque, sin perjuicio de la aplicación de criterios de priorización.</p> <p><u>El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones a que se refiere el artículo 5° de la presente ley, tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos/as. Líderes lideresas sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores/as de Derechos Humanos, víctimas de desplazamiento forzado y miembros de pueblos o comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, cuando el riesgo se genere con ocasión de su participación en el proceso judicial especial de que trata la presente ley.</u></p>
<p>Artículo 6o. <i>Derecho a la Justicia...</i> <b>modificado.</b></p> <p>De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.</p> <p>Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con fundamento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo.</p>	<p>Artículo 4. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 6. <i>Derechos de las víctimas.</i> <u>Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. La definición de estos derechos se encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011. Para estos efectos las víctimas tendrán derecho a participar de manera directa o por intermedio de su representante en todas las etapas del proceso a las que se refiere la presente Ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 . La magistratura velará porque así sea.</u></p>
<p>Artículo 7º. <i>Derecho a la Verdad...</i> <b>sin modificación.</b></p>	
<p>Artículo 8º. <i>Derecho a la Reparación...</i> <b>sin modificación</b></p>	
<p>Artículo 9º. <i>Desmovilización...</i> <b>sin modificación</b></p>	
<p>Artículo 10º. <i>Requisitos de Elegibilidad para la Desmovilización Colectiva...</i> <b>sin modificación</b></p>	
<p>Artículo 11. <i>Requisitos de Elegibilidad para Desmovilización Individual...</i> <b>sin modificación.</b></p>	
<p><b>Nuevo Artículo 11 A. Causales de Terminación del Proceso de Justicia y Paz y exclusión de la lista de postulados.</b></p>	<p>Artículo 11A. <i>Causales de terminación del proceso de Justicia y Paz y exclusión de la lista de postulados.</i></p>







Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>Los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan sido postulados por el Gobierno Nacional para acceder a los beneficios previstos en la presente ley serán excluidos de la lista de postulados previa decisión motivada, proferida en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cualquiera de los siguientes casos, sin perjuicio de las demás que determine la autoridad judicial competente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley.</li> <li>2. Cuando se verifique que el postulado ha incumplido alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente ley.</li> <li>3. Cuando se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona.</li> <li>4. Cuando ninguno de los hechos confesados por el postulado haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley.</li> <li>5. Cuando el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando habiendo sido postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha delinquirido desde el centro de reclusión.</li> <li>6. Cuando el postulado incumpla las condiciones impuestas en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de que trata el artículo 18A de la presente Ley.</li> </ol> <p>La solicitud de audiencia de terminación procede en cualquier etapa del proceso y debe ser presentada por el fiscal del caso. En una misma audiencia podrá decidirse sobre la terminación del proceso de varios postulados, según lo considere pertinente el fiscal del caso y así lo manifieste en su solicitud.</p> <p>Una vez en firme la decisión de terminación del proceso penal especial de Justicia y Paz, la Sala de Conocimiento ordenará compulsar copias de lo actuado a la autoridad judicial competente para que ésta adelante las respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al momento de la comisión de los hechos atribuibles al postulado, o adopte las decisiones a que haya lugar.</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>Si existieren requerimientos previos por investigaciones o procesos ordinarios suspendidos por virtud del proceso penal especial de Justicia y Paz, una vez terminado éste, la Sala de Conocimiento, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, comunicará a la autoridad judicial competente a efectos de que se reactiven de manera inmediata las investigaciones, los procesos, las órdenes de captura y/o las medidas de aseguramiento suspendidas, si a ello hubiere lugar.</p> <p>En todo caso, la terminación del proceso de Justicia y Paz reactiva el término de prescripción de la acción penal.</p> <p>En firme la decisión de terminación del proceso de justicia y paz, la autoridad competente remitirá copia de la decisión al Gobierno Nacional, para lo de su competencia. El desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado para acceder a los beneficios establecidos en la presente ley.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> En el evento en que el postulado no comparezca al proceso de justicia y paz, se seguirá el trámite establecido en el presente artículo para la terminación del proceso y la exclusión de la lista de postulados. Se entenderá que el postulado no comparece al proceso de justicia y paz cuando se presente alguno de los siguientes eventos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se logre establecer su paradero a pesar de las actividades realizadas por las autoridades con el fin de ubicarlo.</li> <li>2. No atienda, sin causa justificada, los emplazamientos públicos realizados a través de medios de comunicación audiovisuales o escritos, ni las citaciones efectuadas al menos en tres (3) oportunidades para lograr su comparecencia a la diligencia de versión libre de que trata la presente ley.</li> <li>3. No se presente, sin causa justificada, para reanudar su intervención en la diligencia de versión libre o en las audiencias ante la magistratura, si éstas se hubieren suspendido.</li> </ol> <p><b>Parágrafo 2°.</b> En caso de muerte del postulado, el Fiscal Delegado solicitará ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, la preclusión de la investigación como consecuencia de la extinción de la acción penal.</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p><b>Parágrafo 3°.</b> En todo caso, si el postulado fallece con posterioridad a la entrega de los bienes, el proceso continuará respecto de la extinción del dominio de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados para la contribución a la reparación integral de las víctimas, de conformidad con las normas establecidas en la presente ley.</p>
<p><b>Nuevo Artículo 11 B.</b> <i>Renuncia expresa al proceso de Justicia y Paz y exclusión de la lista de postulados.</i></p>	<p>Artículo 6. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11 B del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 11 B. <i>Renuncia expresa al proceso de Justicia y Paz y exclusión de la lista de postulados.</i></p> <p>Cuando el postulado decida voluntariamente retirarse del proceso de justicia y paz, podrá presentar su solicitud ante el fiscal o el Magistrado del caso, en cualquier momento del proceso, incluso antes del inicio de la diligencia de versión libre de que trata la presente ley. El fiscal o el Magistrado, según el caso, resolverá la petición y adoptará las medidas que correspondan respecto de su situación jurídica. De considerarla procedente, declarará terminado el proceso y dispondrá el envío de copia de la actuación a la autoridad judicial competente, para que ésta adelante las respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al momento de la comisión de los hechos atribuibles al postulado, o adopte las decisiones a que haya lugar. Igualmente, remitirá al Gobierno Nacional copia de la decisión con el fin de que el desmovilizado sea excluido formalmente de la lista de postulados.</p> <p>Una vez en firme la decisión de terminación del proceso penal especial de Justicia y Paz, el fiscal o el Magistrado del caso ordenará compulsar copias de lo actuado a la autoridad judicial competente para que ésta adelante las respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al momento de la comisión de los hechos atribuibles al postulado, o adopte las decisiones a que haya lugar.</p> <p>Si existieren requerimientos previos por investigaciones o procesos ordinarios suspendidos por virtud del proceso penal especial de Justicia y Paz, una vez terminado éste, la Sala de Conocimiento, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, comunicará a la autoridad judicial competente a efectos de que se reactiven de manera inmediata las investigaciones, los procesos, las órdenes de captura y/o las medidas de aseguramiento suspendidas, si a ello</p>







Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>hubiere lugar.</p> <p>En todo caso, la terminación del proceso de Justicia y Paz reactiva el término de prescripción de la acción penal.</p>
<p><b>Nuevo Artículo 11 C. Vocación reparadora de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados.</b></p>	<p>Artículo 7. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11C del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 11 C. Vocación reparadora de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados.</p> <p>Los bienes entregados, ofrecidos o denunciados para su entrega por los postulados de que trata la presente ley, deben tener vocación reparadora.</p> <p>Se entiende por vocación reparadora la aptitud que deben tener todos los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados en el marco de la presente ley para reparar de manera efectiva a las víctimas.</p> <p>Se entienden como bienes sin vocación reparadora, los que no puedan ser identificados e individualizados, así como aquellos cuya administración o saneamiento resulte en perjuicio del derecho de las víctimas a la reparación integral.</p> <p>El Magistrado con funciones de control de garantías de las Salas de Justicia y Paz a decidir la adopción de medidas cautelares, deberá determinar si el bien tiene o no vocación reparadora, con fundamento en la información suministrada por el fiscal delegado del caso y por la Unidad Administrativa Especial para la Atención Reparación Integral a las Víctimas -Fondo para la Reparación de las Víctimas o Cuando el Magistrado con funciones de control de garantías considere que el bien no tiene vocación reparadora, el bien no podrá ingresar al Fondo para la Reparación de las Víctimas bajo ningún concepto. Excepcionalmente, la Fiscalía entregará en forma provisional al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados que deban ser administrados en forma inmediata por esa entidad para evitar su deterioro, mientras se surte la audiencia preliminar de imposición de medidas cautelares.</p> <p>La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas-, previo al proceso de recepción del bien' para su administración,</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>adelantará de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación y con las demás entidades que posean información relevante, una actualización del alistamiento del bien objeto de administración que permita establecer sus condiciones físicas, jurídicas, sociales y económicas.</p> <p>Parágrafo. Cuando el bien ofrecido o denunciado por el postulado no pueda ser efectivamente entregado por inexistencia de vocación reparadora, y se demuestre que el postulado no dispone de ningún otro bien con vocación reparadora, no se afectará la evaluación del requisito de elegibilidad ni la condición para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento de que trata el artículo 18A de la presente ley.</p>
<p><b>Nuevo Artículo 11 D. Deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las víctimas.</b></p>	<p>Artículo 8. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11 D del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 11 D. <i>Deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las víctimas.</i></p> <p>Para efectos del cumplimiento de los requisitos contemplados en los literales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 Y 11 respectivamente de la presente Ley, los desmovilizados deberán entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona. Estos bienes serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución Tierras Despojadas para que sean destinados a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en los procedimientos penales especiales de justicia y paz, tendrán acceso preferente a estos programas. La Fiscalía General de la Nación tomará todas las medidas necesarias para perseguir los bienes a los que se refiere el presente artículo, que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el postulado. El postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda.</p>







Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>Parágrafo. En ningún caso se afectarán los bienes de los postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad a la desmovilización.</p>
<p><b>Principios. Artículo 12. Oralidad. Sin modificación.</b></p>	
<p>Artículo 13. Celeridad. <b>modificado.</b></p> <p>Los asuntos que se debatan en audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados.</p> <p>Las audiencias preliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de Garantías que designe el Tribunal respectivo.</p> <p>En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.</li> <li>2. La adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos.</li> <li>3. La solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento.</li> <li>4. <u>La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes.</u></li> <li>5. <u>La formulación de la imputación.</u></li> <li>6. La formulación de cargos.</li> <li>7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.</li> </ol> <p>Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias deberán fundamentarse fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o de desestimación de las pretensiones de las partes.</p> <p>El reparto de los asuntos a que se refiere la presente ley, deberá hacerse el mismo día en que se reciba la actuación en el correspondiente despacho</p>	<p>Artículo 9. Modifíquese el artículo 13 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 13. <i>Celeridad.</i> (...)</p> <p>4. <u>La solicitud de imponer medidas cautelares sobre bienes, para contribuir a la reparación integral de las víctimas.</u></p> <p>5. <u>La solicitud de ordenar la restitución de los bienes y/o la cancelación de los títulos obtenidos fraudulentamente, siempre que se trate de bienes cuya restitución sea tramitada por la presente Ley.</u></p>
<p>Artículo 14. <i>Defensa.</i> <b>sin modificación.</b></p>	
<p>Artículo 15. <i>Esclarecimiento de la Verdad...</i> <b>modificado.</b></p> <p>Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se</p>	<p>ARTÍCULO 10. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 15. <i>Esclarecimiento de la verdad.</i></p> <p>Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
<p><u>garantice la defensa de los procesados.</u></p> <p><u>La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.</u></p> <p><u>Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos.</u></p> <p><u>La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial <u>que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.</u></u></p>	<p><u>para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre el patrón de macro-criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y se pueda develar los contextos, las causas y los motivos del mismo.</u></p> <p><u>La investigación se surtirá conforme a los criterios de pronzación que determine el Fiscal General de la Nación en desarrollo del artículo 16A de la presente ley. En todo caso, se garantizará el derecho de defensa de los procesados y la participación efectiva de las víctimas.</u></p> <p><u>la información que surja de los procesos de Justicia y Paz deberá ser tenida en cuenta en las investigaciones que busquen esclarecer las redes de apoyo y financiación de los grupos armados organizados al margen dela ley.</u></p> <p><u>Con la colaboración de los desmovilizados, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos.</u></p> <p><u>Parágrafo. En los eventos en los que haya lugar, la Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. la protección de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial <u>a los que se les asignen funciones para la implementación de la presente ley, será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.</u></u></p>
<p><b>Nuevo artículo. 15 A.</b> Esclarecimiento del fenómeno de despojo de tierras y cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.</p>	<p>Artículo 11. la ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 15A del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 15A. Esclarecimiento del fenómeno de despojo de tierras y cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.</p> <p>Cuando la víctima haya denunciado el despojo o abandono forzado de sus bienes por parte de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, el fiscal delegado en coordinación con las autoridades de policía judicial y de conformidad con</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>los criterios de priorización, dispondrá la realización de las labores investigativas necesarias con el objetivo de esclarecer el patrón de macrocriminalidad de despojo y abandono forzado de tierras. lo mismo procederá oficiosamente ante presuntos despojos o abandonos forzados de bienes identificados por la Fiscalía General de la Nación.</p> <p>Cuando de los elementos materiales probatorios o de la información legalmente obtenida, la Fiscalía General de la Nación encuentre información relevante para el proceso de restitución de tierras, la pondrá a disposición de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el fin de contribuir a los procedimientos que ésta adelanta para la restitución de los predios despojados o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley 1448 de 2011.</p>
<p>Artículo 16... <b>modificado.</b> <i>Competencia.</i></p> <p>Recibido por <u>la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz</u>, el, o los nombres de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal delegado que corresponda, <u>asumirá de manera inmediata la competencia para:</u></p> <p>16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.</p> <p>16.2 Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros.</p> <p>16.3 Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización.</p> <p>El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el CSJ, mediante acuerdo que expida antes de que se inicie cualquier trámite, será competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley.</p> <p><u>No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad judicial.</u></p>	<p>Artículo 12. Modifíquese el artículo 16 de la ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 16. <i>Competencia.</i> Recibido por <u>la Fiscalía General de la Nación</u>, el nombre o los nombres de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a lo dispuesto en la presente ley, el fiscal delegado que corresponda, <u>de acuerdo con los criterios de priorización que establezca el Fiscal General de la Nación de conformidad con el artículo 16A de la presente ley, asumirá de manera inmediata la competencia para:</u></p> <p>(...)</p> <p><u>En caso de conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad judicial, primará siempre la competencia de la Sala de conocimiento de justicia y paz, hasta tanto se determine que el hecho no se cometió durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley.</u></p>
<p><b>Nuevo artículo. 16 A.</b> <i>Criterios de priorización de casos.</i></p>	<p>Artículo 13. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 16A del siguiente tenor:</p> <p><i>Artículo 16A. Criterios de priorización de casos.</i> Con el</p>







Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>fin de garantizar los derechos de las víctimas, el Fiscal General de la Nación determinará los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal que tendrán carácter vinculante y serán de público conocimiento.</p> <p>Los criterios de pronzación estarán dirigidos a esclarecer el patrón de macro-criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y a revelar los contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando los esfuerzos de investigación en los máximos responsables. Para estos efectos, la Fiscalía General de la Nación adoptará mediante resolución el "Plan Integral de Investigación Priorizada".</p>
<p>Artículo 17... <b>modificado.</b> <i>Versión Libre y Confesión.</i></p> <p>Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento.</p> <p>En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, y la fecha de su ingreso al grupo.</p> <p>La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso <u>elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.</u> <u>El desmovilizado se dejará a disposición del magistrado que ejerza la función de control de garantías, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de</u></p>	<p>Artículo 14. Modifíquese el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 17. <i>Versión libre y confesión.</i> Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado quien los interrogará sobre los hechos de que tengan conocimiento.</p> <p>En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo <u>y los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron.</u></p> <p>La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso, <u>de conformidad con los criterios de priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación, elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los</u></p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
<p><u>formulación de imputación, previa solicitud del fiscal que conozca del caso.</u></p>	<p><u>patrones y contextos de criminalidad y victimización.</u></p> <p><u>Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación podrá reglamentar y adoptar metodologías tendientes a la recepción de versiones libres colectivas o conjuntas, con el fin de que los desmovilizados que hayan pertenecido al mismo grupo puedan aportar un contexto claro y completo que contribuya a la reconstrucción de la verdad y al desmantelamiento del aparato de poder del grupo armado organizado al margen de la ley y sus redes de apoyo. La realización de estas audiencias permitirá hacer imputación, formulación y aceptación de cargos de manera colectiva cuando se den plenamente los requisitos de Ley.</u></p>
<p><b>Nuevo artículo. 17 A. Bienes objeto de extinción de dominio.</b></p>	<p>Artículo 15. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 17A del siguiente tenor:</p> <p><i>Bienes objeto de extinción de dominio.</i> Los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas, así como aquellos identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones, podrán ser cautelados de conformidad con el procedimiento dispuesto en el artículo 17B de la presente ley, para efectos de extinción de dominio.</p> <p>Parágrafo 1°. Se podrá extinguir el derecho de dominio de los bienes, aunque sean objeto de sucesión por causa de muerte o su titularidad esté en cabeza de los herederos de los postulados.</p> <p>Parágrafo 2°. La extinción de dominio de los bienes recaerá sobre los derechos reales principales y accesorios que tenga el bien, así como sobre sus frutos y rendimientos .</p>
<p><b>Nuevo artículo. 17 B. Imposición de Medidas cautelares sobre bienes para efectos de extinción de dominio.</b></p>	<p>ARTÍCULO 16. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 17B del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 17B. <i>Imposición de medidas cautelares sobre bienes para efectos de extinción de dominio.</i></p> <p>Cuando el postulado haya ofrecido bienes de su titularidad real o aparente o denunciado aquellos del grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció, o la Fiscalía haya identificado bienes no ofrecidos o denunciados por los postulados, el fiscal delegado dispondrá la realización de las labores investigativas pertinentes para la identificación plena de esos bienes y la documentación de las circunstancias relacionadas con</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>la posesión, adquisición y titularidad de los mismos. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Fondo para la Reparación de las Víctimas- participará en las labores de alistamiento de los bienes susceptibles de ser cautelados, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 C, y suministrará toda la información disponible sobre los mismos. Esta información será soportada ante el magistrado con función de control de garantías en la respectiva audiencia para la decisión sobre la imposición de medidas cautelares.</p> <p>Quando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución, el fiscal delegado solicitará al magistrado con funciones de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para la solicitud y decisión de medidas cautelares, a la cual deberá convocarse a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Fondo para la Reparación de las Víctimas. En esta audiencia reservada, el fiscal delegado solicitará sin dilación al magistrado la adopción de medidas cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo sobre los bienes; igualmente, procederá la medida sobre depósitos en entidades financieras, en el interior y en el exterior del país de conformidad con los acuerdos de cooperación judicial en vigor. En el caso de bienes muebles como títulos valores y sus rendimientos, el fiscal delegado solicitará la orden de no pagarlos, cuando fuere imposible su aprehensión física. En el caso de personas jurídicas, el magistrado al momento de decretar la medida cautelar ordenará que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como administradora del Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerza los derechos sociales que correspondan a las acciones, cuotas o partes de interés social objeto de la misma hasta que se produzca decisión judicial definitiva y mientras tanto quienes aparezcan inscritos como socios, miembros de los órganos sociales y demás órganos de administración, representante legal o revisor fiscal, no podrán ejercer ningún acto de disposición, administración o gestión sobre aquellas. Si el magistrado con función de control de garantías acepta la solicitud, las medidas cautelares serán</p>







Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>adoptadas de manera inmediata.</p> <p>Los bienes afectados con medida cautelar serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Fondo para la Reparación de las Víctimas, que tendrá la calidad de secuestre y estará a cargo de la administración provisional de los bienes, mientras se profiere sentencia de extinción de dominio.</p> <p>Parágrafo 1°. Si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Fondo para la Reparación de las Víctimas- se encuentra administrando bienes que no tengan medida cautelar, podrá solicitar al magistrado con función de control de garantías, directamente o a través de la Fiscalía General de la Nación, la imposición de medidas cautelares sobre los bienes.</p> <p>Parágrafo 2°. Cuando la medida cautelar se decreta sobre bienes respecto de los cuales con posterioridad se eleve solicitud de restitución, tales bienes y la solicitud de restitución serán transferidos al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para efectos de su trámite a través de los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su normatividad complementaria, sin que se requiera el levantamiento de la medida cautelar por parte de la magistratura.</p> <p>Parágrafo 3°. Si los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados o identificados por la Fiscalía General de la Nación en los términos del presente artículo, tuvieren solicitud de restitución ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Fondo para la Reparación de las Víctimas, el fiscal delegado solicitará la medida cautelar sobre los mismos y una vez decretada ordenará el traslado de la solicitud de restitución y los bienes de manera inmediata al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para efectos de su trámite a través de los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su normatividad complementaria.</p> <p>Parágrafo 4°. Cuando los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados estén involucrados en un trámite de extinción del derecho</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>de dominio adelantado en el marco de la Ley 793 de 2002, el fiscal delegado de Justicia y Paz solicitará la medida cautelar sobre el bien. Una vez decretada la medida, el fiscal que conozca del trámite de extinción de dominio declarará la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre este bien y ordenará a la Dirección Nacional de Estupefacientes. o quien haga sus veces. que ponga de manera inmediata el bien a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas. En este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 e, los bienes sin vocación reparación no podrán ingresar al Fondo para la Reparación de las Víctimas.</p> <p>Parágrafo 5°. Excepcionalmente, el fiscal delegado, atendiendo las circunstancias de riesgo inminente, perjuicio irreparable o pérdida de los bienes, podrá comparecer ante el Magistrado con funciones de control de garantías para que tome las medida urgentes y necesarias para la conservación de éstos, a partir del momento mismo de la postulación del desmovilizado al procedimiento de la presente ley.</p> <p>Parágrafo 6°. con posterioridad a la imposición de medidas cautelares y previo a la recepción del bien para su administración, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Fondo para la Reparación de las Víctimas- realizará conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación y con las demás entidades que posean información relevante sobre el bien, la revisión del alistamiento de que trata el inciso final del artículo 11 C de la presente ley.</p>
<p><b>Nuevo artículo. 17 C.</b></p>	<p>Artículo 17. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 17C del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 17C. Incidente de oposición de terceros a la medida cautelar. En los casos en que haya terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados para efectos de extinción de dominio en virtud del artículo 178, e magistrado con función de control de garantías, a instancia del interesado, dispondrá e trámite de un incidente que se desarrollará así:</p> <p>Presentada la solicitud por parte del interesado, en cualquier tiempo hasta antes de iniciarse la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, el magistrado con función de control de garantías convocará a una audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes en la cual el solicitante aportará las</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>pruebas que pretenda hacer valer, cuyo traslado se dará a la Fiscalía y a los demás intervinientes por un término de 5 días hábiles para que ejerzan el derecho de contradicción. Vencido este término el Magistrado decidirá el incidente y dispondrá las medidas a que haya lugar.</p> <p>Si la decisión del incidente fuere favorable al interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la medida cautelar. En caso contrario, el trámite de extinción de dominio continuará su curso y la decisión será parte de la sentencia que ponga fin a un proceso de Justicia y Paz.</p> <p>Este incidente no suspende el curso del proceso.</p>
<p>Artículo 18... <b>modificado.</b> <i>Formulación de imputación.</i></p> <p>Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, <u>el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación.</u></p> <p>En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas..</p> <p>A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, <u>la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz</u>, con el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso <u>solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud, si a ello hubiere lugar.</u></p> <p>Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal.</p>	<p>Artículo 18. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 18. <u>Formulación de imputación. El fiscal delegado para el caso solicitará a Magistrado que ejerza las funciones de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación,</u> cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, - o de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan <u>dentro del patrón de macro-criminalidad en el accionar del grupo armado organizado al margen de la ley que se pretenda esclarecer.</u></p> <p>En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al Magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente, solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes para efectos de la contribución a la reparación integral de las víctimas.</p> <p>A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, <u>la Fiscalía General de la Nación</u>, con el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso <u>solicitará a la sala de conocimiento la programación de una audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos.</u></p>







Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal.</p> <p><u>Parágrafo. Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macro-criminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macro-criminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales casos el magistrado de control de garantías remitirá el expediente a la Sala de conocimiento, para que ésta proceda a proferir sentencia de conformidad con el artículo 24 de la presente Ley, en un término que no podrá exceder los quince (15) días contados a partir de la audiencia de formulación de la imputación. La terminación anticipada del proceso no supondrá, en ningún caso, el acceso a beneficios penales adicionales a la pena alternativa.</u></p>
<p><b>Nuevo artículo. 18 A. Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso.</b></p>	<p>ARTÍCULO 19. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18A del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 18A. <i>Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso.</i> El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el Magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley.</p> <p>El Magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y</li> </ol>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario;</p> <p>2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles. si éstas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC y haber obtenido certificado de buena conducta;</p> <p>3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz;</p> <p>4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;</p> <p>5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.</p> <p>Para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes. Una vez concedida, la sustitución de la medida de aseguramiento podrá ser revocada por el Magistrado con funciones de control de garantías a solicitud de la Fiscalía General de la Nación o de las víctimas o de sus representantes, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:</p> <p>1. Que el postulado deje de participar en las diligencias judiciales de su proceso de justicia y paz, o se compruebe que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad;</p> <p>2. Que el postulado incumpla las condiciones fijadas por la autoridad judicial competente;</p> <p>3. Que el postulado no participe del proceso de reintegración diseñado por el Gobierno Nacional para los postulados a la Ley de Justicia y Paz en desarrollo del artículo 66 de la presente ley.</p> <p>Parágrafo. En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
<p><b>Nuevo Artículo. 18 B. Suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta en justicia ordinaria.</b></p>	<p>la presente ley.</p> <p>Artículo 20. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18B del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 18B. <i>Suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta en justicia ordinaria.</i> En la misma audiencia en la que se haya sustituido la medida de aseguramiento en los términos del artículo 18A, el postulado que además estuviere previamente condenado en la justicia penal ordinaria, podrá solicitar al magistrado de control de garantías de Justicia y Paz la suspensión condicional de la ejecución de la pena respectiva, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubieren sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Si el magistrado de control de garantías de Justicia y Paz puede inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley, remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la condena respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena ordinaria.</p> <p>La suspensión de la ejecución de la pena será revocada a solicitud del magistrado de control de garantías de Justicia y Paz, cuando el postulado incurra en cualquiera de las causales de revocatoria establecidas en el artículo 18A.</p> <p>En el evento de que no se acumulen en la sentencia de Justicia y Paz las penas impuestas en procesos de justicia ordinaria, o que habiéndose acumulado, la sala de conocimiento de Justicia y Paz no haya otorgado la pena alternativa, se revocará la suspensión condicional de la ejecución de la pena que en virtud del presente artículo se haya decretado. Para estos efectos, se suspenderá el término de prescripción de la pena en la justicia ordinaria, hasta cuando cobre ejecutoria la sentencia de Justicia y paz.</p>
<p>Artículo 19... <b>modificado.</b> Aceptación de cargos.</p> <p>En la audiencia de formulación de cargos el <u>imputado</u> podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como</p>	<p>Artículo 21. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p><i>Artículo 19. Audiencia de formulación y aceptación</i></p>







Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
<p>consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la desmovilización.</p> <p>Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En este evento el Magistrado que ejerza la función de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la que corresponda su conocimiento.</p> <p>Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a audiencia de sentencia e individualización de pena.</p> <p>Parágrafo 1°. Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas.</p> <p>Parágrafo 2°. Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.</p>	<p>de cargos.</p> <p>En la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, el postulado podrá aceptar los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación.</p> <p>Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En este evento, la sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz continuará con la audiencia y realizará el respectivo control material y formal de la aceptación total o parcial de cargos por parte del postulado y continuará con el trámite dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.</p> <p>Parágrafo. Si en esta audiencia el postulado no acepta los cargos o se retracta de los admitidos en la versión libre, la Sala de Conocimiento ordenará compulsar copias de lo actuado al funcionario competente conforme a la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas. Para el efecto, la Sala tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 11A de la presente ley.</p>
<p>Artículo 20... <b>sin modificación.</b> Acumulación de Procesos y Penas.</p>	
<p>Artículo 21... <b>sin modificación.</b> Ruptura De La Unidad Procesal.</p>	
<p>Artículo 22... <b>modificado.</b> Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización.</p> <p>Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en la formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley.</p>	<p>Artículo 22. Modifíquese el artículo 22 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 22. <u>Suspensión de investigaciones.</u></p> <p>Una vez en firme la medida de aseguramiento y hasta antes de proferir sentencia en la justicia ordinaria contra un postulado al proceso de justicia y paz, respecto de un hecho cometido durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, el fiscal que estuviere conociendo el caso en la jurisdicción ordinaria suspenderá la investigación. Si el proceso en la jurisdicción ordinaria estuviere en etapa de juicio, el juez respectivo ordenará la suspensión. La investigación o el juicio únicamente serán suspendidos respecto de la persona vinculada y del hecho que fundamentó su</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p><u>vinculación. El fiscal o el juez de la justicia ordinaria informarán a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz enviando copia de la decisión de fondo adoptada y de la suspensión.</u></p> <p><u>Parágrafo. La suspensión del proceso en la jurisdicción ordinaria será provisional hasta la terminación de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos realizada ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, y será definitiva, para efectos de acumulación, si el postulado acepta los cargos. Para estos efectos, también se suspenderá el término de prescripción del ejercicio de la acción penal en la jurisdicción ordinaria, hasta la terminación de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos.</u></p>
<p>Artículo 23. <i>Incidente de reparación integral.</i></p> <p><u>En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.</u></p> <p><u>Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones. La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.</u></p> <p><u>Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oírá el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.</u></p>	<p>Artículo 23. Modifíquese el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 23. Incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas.</p> <p><u>En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación total o parcial de los cargos formulados, se dará inicio al incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal, dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación. Este incidente no podrá extenderse por más de veinte (20) días hábiles.</u></p> <p><u>La audiencia del incidente se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exponga las afectaciones causadas con la conducta criminal. Bastará con la prueba sumaria para fundamentar las afectaciones alegadas y se trasladará la carga de la prueba al postulado, si éste estuviere en desacuerdo.</u></p> <p><u>La Sala examinará la versión de la víctima y la rechazará si quien la promueve no es víctima, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.</u></p> <p><u>Admitida la versión de la víctima, la Sala la pondrá en conocimiento del postulado imputado que ha aceptado los cargos. Si el postulado estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la víctima se</u></p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
<p><u>Parágrafo 1°. Exclusivamente para efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público, podrán solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.</u></p> <p><u>Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente de reparación integral.</u></p>	<p><u>incorporará a la decisión que falla el incidente, junto con la identificación de las afectaciones causadas a la víctima, las cuales en ningún caso serán tasadas. En caso contrario, dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por el postulado imputado, si la hubiere, oírá el fundamento de las respectivas versiones y en el mismo acto fallará el incidente.</u></p> <p><u>La Sala incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en la audiencia con el fin de contribuir al esclarecimiento del patrón de macro-criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, así como de los contextos, las causas y los motivos del mismo, y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.</u></p> <p><u>Parágrafo 1°. La Defensoría del Pueblo, previo a la audiencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas, deberá explicar a las víctimas que participan en el proceso de forma clara y sencilla, las distintas rutas de acceso a los programas de reparación Integral a los que se refiere la Ley 1448 de 2011.</u></p> <p><u>Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho a participar en el incidente de que trata el presente artículo.</u></p> <p><u>Parágrafo 3°. A la audiencia de incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas se citará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a efectos de suministrar la información que sea requerida por la sala del tribunal superior de distrito judicial y de informar a la víctima sobre los procedimientos de reparación integral de la Ley 1448 de 2011.</u></p> <p><u>Parágrafo 4°. Si participare en el incidente del que trata el presente artículo una pluralidad de personas que afirmen ostentar la condición de sujeto de</u></p>







Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p><u>reparación colectiva, la Sala ordenará la remisión a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que ésta valore de manera preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los términos de la Ley 1448 de 2011. Si la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al valorar la información suministrada considera que efectivamente se trata de un sujeto de reparación colectiva, deberá iniciar el trámite de la reparación colectiva administrativa.</u></p> <p><u>Parágrafo 5°. La Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente y la Fiscalía General de la Nación tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que en el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas participen las víctimas correspondientes al patrón de macro-criminalidad que se esté esclareciendo dentro del proceso, de conformidad con los criterios de priorización.</u></p>
<p><b>Nuevo Artículo 23 A. Reparación integral.</b></p>	<p>Artículo 24. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 23A, del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 23A. <i>Reparación integral.</i></p> <p>Con el fin de asegurar a las víctimas una reparación integral, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según corresponda, adoptarán las medidas articuladas de rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, según corresponda por el hecho victimizante, de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la Ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias.</p> <p>En concordancia con el artículo 23 de la presente ley, la Sala remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de que la víctima sea objeto de la aplicación integral de las distintas medidas de justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano.</p>
<p>Artículo 24... <b>modificado.</b> <i>Contenido de la sentencia.</i></p> <p>De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y</p>	<p>Artículo 25. Modifíquese el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 24. <i>Contenido de la sentencia.</i> De acuerdo</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
<p>las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, <u>los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.</u></p> <p>La Sala <u>correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.</u></p>	<p>con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley; <u>la declaratoria de extinción del derecho de dominio sobre los derechos principales y accesorios que recaigan sobre los bienes destinados para la reparación, así como sobre sus frutos y rendimientos; la acumulación jurídica de penas; la obligación del condenado de participar en el proceso de reintegración de que trata el artículo 66 de la presente ley una vez se encuentre en libertad; las circunstancias previstas en el artículo 25 de la presente ley, así como los compromisos que debe asumir el condenado por el tiempo que disponga la sala de conocimiento.</u></p> <p><u>En el evento que el condenado incumpla alguno de los compromisos u obligaciones determinados en la sentencia se le revocará el beneficio de la pena alternativa y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción principal y las accesorias que le fueron impuestas.</u></p> <p>La Sala de <u>Conocimiento en el marco de la presente ley, según el caso, se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa</u></p>
<p>Artículo 25... <b>modificado.</b> <u>Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto.</u></p> <p><u>Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas.</u></p>	<p>Artículo 26. Modifíquese el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 25. <u>Condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad.</u></p> <p><u>Si a los beneficiarios de la pena alternativa de conformidad con esta Ley, con posterioridad a la concesión de la pena alternativa se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a los grupos armados organizados al margen de la ley y antes de su desmovilización, y que no hubieren sido reconocidos o aceptados por el postulado en el marco del proceso especial de que trata la presente ley, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de las mismas.</u></p> <p><u>Adicionalmente, si con posterioridad a la sentencia emitida como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la presente ley, y hasta el término de la condena ordinaria allí establecida, la</u></p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p><u>autoridad judicial competente determinare que el beneficiario de la pena alternativa no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, perderá el beneficio de la pena alternativa.</u></p> <p><u>Quando la autoridad judicial competente compruebe cualquiera de los incumplimientos a que se refiere el presente artículo, procederá a la revocatoria de los beneficios jurídicos y ordenará la ejecución de la pena principal contenida en la sentencia de Justicia y Paz.</u></p> <p><u>Parágrafo 1. Las causales de revocatoria de la pena alternativa contenidas en el presente artículo, se darán a conocer al desmovilizado postulado durante el proceso y estarán contenidas en la sentencia.</u></p> <p><u>Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará siempre y cuando no se trate de procedimientos parciales de imputación, terminación anticipada del proceso, formulación y aceptación de cargos, o de sentencias parciales proferidas en el marco de los procedimientos de Justicia y Paz.</u></p>
<p>Artículo 26...<b>modificado.</b> <i>Recursos.</i></p> <p><u>Salvo la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.</u></p> <p><u>La apelación procede contra los autos que resuelvan asuntos de fondo, adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en la misma audiencia en que se profiera la decisión, y se concede en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia.</u></p> <p><u>El Magistrado ponente citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la actuación en la Secretaría de la Sala de Casación Penal. Sustentado el recurso por el apelante y oídos las demás partes e intervinientes, la Sala podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que corresponda.</u></p> <p><u>Si el recurrente no concurriere o no sustentare el recurso, se declarará desierto.</u></p>	<p>Artículo 27. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 26. <i>Recursos.</i></p> <p><u>La apelación sólo procede contra la sentencia y contra los autos que resuelvan asuntos de fondo durante el desarrollo de las audiencias, sin necesidad de interposición previa del recurso de reposición.</u></p> <p><u>En estos casos, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y las normas que los modifiquen, sustituyan y adicionen.</u></p> <p><u>Para las demás decisiones en el curso del procedimiento especial de la presente ley, sólo habrá lugar a interponer el recurso de reposición que se sustentará y resolverá de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.</u></p> <p><u>La apelación se concederá en el efecto suspensivo cuando se interponga contra la sentencia, contra el auto que resuelva sobre nulidad absoluta, contra el</u></p>







Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
<p>Parágrafo 1°. El trámite de los recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, excepto lo relacionado con acciones de tutela.</p> <p>Parágrafo 2°. De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal vigente.</p> <p>Parágrafo 3°. Contra la decisión de segunda instancia no procede recurso de casación.</p>	<p><u>que decreta y rechaza la solicitud de preclusión del procedimiento, contra el que niega la práctica de una prueba en el juicio, contra el que decide sobre la exclusión de una prueba, contra el que decide sobre la terminación del proceso de Justicia y Paz y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas. En los demás casos se otorgará en el efecto devolutivo.</u></p> <p>(...)</p> <p><u>Parágrafo 4°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integra a las Víctimas podrá recurrir las decisiones relacionadas con los bienes que administré el Fondo para la Reparación de las Víctimas.</u></p>
<p>Artículo 32...<b>modificado.</b> <i>Competencias de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz.</i></p> <p>Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley, <u>vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados.</u></p> <p><u>Corresponde a la Secretaria del respectivo Tribunal organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados, y contar con una Oficina de Comunicaciones para divulgar la verdad de lo acontecido.</u></p>	<p>Artículo 28. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 32. <i>Competencia funcional de los magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial en Materia de Justicia y la Paz.</i></p> <p>Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designado por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley.</p> <p><u>El juzgamiento en los procesos a los que se refiere la presente ley, en cada una de las fases del procedimiento, se llevará a cabo por las siguientes autoridades judiciales:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1. Los Magistrados con funciones de control de garantías.</u></li> <li><u>2. Los Magistrados con funciones de conocimiento de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.</u></li> <li><u>3. Los jueces con funciones de ejecución de sentencias de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, quienes estarán a cargo de vigilar en cumplimiento de las penas y de las obligaciones impuestas a los condenados, de acuerdo con la distribución de trabajo que disponga el Consejo Superior de la Judicatura en cada una de las salas de Justicia y Paz.</u></li> </ol>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las decisiones conducentes proveerá los cargos que sean necesarios para garantizar que las funciones de las autoridades judiciales mencionadas en el presente artículo, sean ejercidas por Magistrados diferentes. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de Magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a partir de las listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996.</p>
Artículo 33... <b>sin modificación.</b> <i>Unidad Nacional de Fiscalía Para La Justicia y La Paz.</i>	
Artículo 34... <b>sin modificación.</b> <i>Defensoría Pública.</i>	
Artículo 35... <b>sin modificación.</b> <i>Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz.</i>	
Artículo 36... <b>sin modificación.</b> <i>Participación de las Organizaciones Sociales de Asistencia a las Víctimas.</i>	
Artículo 37... <b>sin modificación.</b> <i>Derechos de las Víctimas</i>	
Artículo 38... <b>sin modificación.</b> <i>Protección a Víctimas y Testigos</i>	
Artículo 39... <b>sin modificación.</b> <i>Excepción a la Publicidad en el Juicio</i>	
Artículo 40... <b>sin modificación.</b> <i>Otras Medidas de Protección durante El Proceso.</i>	
Artículo 41... <b>sin modificación.</b> <i>Atención a Necesidades Especiales.</i>	
Artículo 42... <b>sin modificación.</b> <i>Deber General de Reparar.</i>	
Artículo 43... <b>sin modificación.</b> <i>Reparación.</i>	
<p>Artículo 44...<b>modificado.</b> <u>Actos de reparación.</u></p> <p><u>La reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.</u></p> <p><u>Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.</u></p>	<p>Artículo 29. Modifíquese el artículo 44 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 44. <u>Actos de contribución a la reparación integral.</u></p> <p><u>Al momento de emitir sentencia como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la presente ley, la Sala de conocimiento podrá ordenar al postulado llevar a cabo cualquiera de los siguientes actos de contribución a la reparación integral:</u></p> <p><u>1. La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas vinculadas con ella.</u></p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>2. El reconocimiento público de responsabilidad, la declaración pública de arrepentimiento y el compromiso de no incurrir en conductas punibles.</p> <p>3. La participación en los actos simbólicos de resarcimiento y redignificación de las víctimas a los que haya lugar de conformidad con los programas que sean ofrecidos, para tal efecto.</p> <p>4. La colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas, de los que tenga conocimiento.</p> <p>5. Llevar a cabo acciones de servicio social.</p> <p>Parágrafo. La libertad a prueba estará sujeta a la ejecución de los actos de contribución a la reparación integral que hayan sido ordenados en la sentencia.</p>
<p>Artículo 45... <b>sin modificación.</b> <i>Solicitud de Reparación.</i></p>	
<p>Artículo 46... <b>modificado.</b> <i>Restitución.</i></p> <p><u>La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades.</u></p>	<p>Artículo 30. Modifíquese el artículo 46 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 46. <i>Restitución.</i></p> <p><u>La restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados se llevará a cabo mediante el proceso establecido en la Ley 1448 de 2011 y las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.</u></p> <p><u>Con el objeto de integrar las medidas de justicia transicional, no habrá restitución directa en el desarrollo de los procesos judiciales de que trata la presente ley.</u></p>
<p><b>Nuevo Artículo.</b> 46 A. <i>De los postulados extraditados.</i></p>	<p>Artículo 31. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 46A del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 46A. <i>De los postulados extraditados.</i></p> <p>Para contribuir a la efectividad del derecho a la justicia, el Estado colombiano promoverá la adopción de medidas conducentes a facilitar la participación en los procesos judiciales de los postulados que se encuentren en jurisdicción extranjera por efecto de extradición concedida. Para ello, el Estado debe procurar la adopción de medidas conducentes a la colaboración de estos postulados con la administración de justicia, a través de testimonios dirigidos a esclarecer hechos y</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>conductas cometidas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado interno.</p> <p>En particular, se deben adoptar medidas para que los postulados extraditados revelen los motivos y las circunstancias en que se cometieron las conductas investigadas y, en caso de fallecimiento o desaparición, la suerte que corrió la víctima.</p> <p>Entre estas medidas se podrán promover la transmisión de las diligencias que se realicen con los postulados, garantizar medidas de protección para las familias de estos, así como todas aquellas que conduzcan a una materialización efectiva de los derechos de las víctimas.</p> <p>Para contribuir a la efectividad del derecho a la reparación integral, se deben adoptar medidas tendientes a facilitar que los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados extraditados sean incautados con destino al Fondo para la Reparación de las Víctimas de que trata la presente ley, o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según corresponda. Para el cumplimiento de esta medida, en el marco de los diferentes acuerdos de cooperación judicial internacional, la Fiscalía General de la Nación realizará las labores de investigación necesarias para la identificación y alistamiento de los bienes de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la presente ley, así como para la identificación y persecución de bienes ubicados en el exterior.</p>
<p><b>Nuevo Artículo. 46B. Saneamiento jurídico de bienes.</b></p>	<p>Artículo 32. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 46B del siguiente tenor:</p> <p>Artículo 46B. <i>Saneamiento jurídico de bienes.</i></p> <p>Con el fin de contribuir a la satisfacción del derecho de las víctimas a la reparación integral, las asambleas departamentales los concejos municipales o distritales implementarán programas de condonación y compensación de los impuestos que afecten los inmuebles destinados a la reparación o restitución en el marco de la Ley 1448 de 2011. En caso de que sean condonadas deudas en virtud del presente artículo, los departamentos, municipios o distritos no podrán ser penalizados, ser objeto de ningún tipo de sanción o ser evaluados de forma negativa para la obtención de créditos, con motivo de una reducción en el recaudo tributario respectivo .</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	Así mismo, se entenderá condonada la cartera morosa de servicios públicos domiciliarios y se levantarán los gravámenes que hayan sido constituidos para la obtención de créditos con el sector financiero por parte de un desmovilizado, sin perjuicio de que se mantenga la obligación de pagar dichos créditos en cabeza de éste.
Artículo 47... <b>sin modificación.</b> <i>Rehabilitación.</i>	
Artículo 48... <b>sin modificación.</b> <i>Medidas de Satisfacción y Garantías de No Repetición.</i>	
Artículo 49... <b>sin modificación.</b> <i>Programas de Reparación Colectiva.</i>	
Artículo 50... <b>sin modificación.</b> <i>Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.</i>	
Artículo 51... <b>sin modificación.</b> <i>Funciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.</i>	
Artículo 52... <b>sin modificación.</b> <i>Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes.</i>	
Artículo 53... <b>sin modificación.</b> <i>Composición.</i>	
Artículo 54... <b>modificado</b> ( <i>Parágrafo adicionado.</i> ). <i>Fondo Para La Reparación de Las Víctimas.</i>	<p>Artículo 33. El artículo siguiente contenido:</p> <p>El artículo 54 de Ley 975 de 2005 tendrá un Parágrafo 5°.</p> <p>Parágrafo 5°. Los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, tanto los entregados por los postulados en el marco del proceso penal especial de que trata la presente ley como aquellos que provengan de las demás fuentes de conformación del Fondo, serán destinados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para el pago de los programas de reparación administrativa que se desarrollen de conformidad con la Ley 1448 de 2011.</p> <p>Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 178 y en el artículo 46 de la presente ley.</p>
Artículo 55... <b>sin modificación.</b> <i>Funciones de la Red de Solidaridad Social.</i>	
Artículo 56... <b>sin modificación.</b> <i>Deber de Memoria.</i>	
<b>Nuevo Artículo 56 A.</b> Deber judicial de Memoria.	<p>Artículo 34. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 56A con el siguiente.</p> <p>Artículo 56A. <i>Deber judicial de memoria.</i></p> <p>Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a través</p>



Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>de la correspondiente secretaría, deberán organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar la memoria judicial.</p> <p>También deberán garantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados y disponer de los medios necesarios para divulgar la verdad de lo acontecido, en coordinación con el Centro de Memoria Histórica.</p> <p>Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a través de la correspondiente secretaría, deberán remitir copias de estos registros al Centro de Memoria Histórica.</p> <p>En virtud del artículo 144 de la Ley 1448 de 2011, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial podrán, a fin de fortalecer la construcción de la memoria histórica, encomendar la custodia de los archivos a los que se refiere el presente artículo al Archivo General de la Nación o a los Archivos de los entes territoriales.</p> <p>La Fiscalía General de la Nación y el Centro de Memoria Histórica celebrarán convenios con el fin de regular el flujo de información para la construcción de la memoria histórica.</p> <p>En desarrollo de estos convenios el Centro de Memoria Histórica podrá acceder a información reservada, sin que ésta pierda tal carácter.</p>
Artículo 57... <b>sin modificación.</b> Medidas de Preservación de los Archivos.	
Artículo 58... <b>sin modificación.</b> Medidas para Facilitar el Acceso a los Archivos	
Artículo 59, 60 y 61... <b>sin modificación.</b> Acuerdos Humanitarios.	
Artículo 62... <b>sin modificación.</b>	
Artículo 63... <b>sin modificación.</b>	
Artículo 64... <b>sin modificación.</b>	
Artículo 65... <b>sin modificación.</b>	
<p>Artículo 66... <b>modificado.</b></p> <p>De acuerdo con el Programa de Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación</p>	<p>Artículo 35. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 66. <i>Resocialización y reintegración de</i></p>







Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
<p>de los desmovilizados a proyectos productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos.</p> <p>Simultáneamente y de acuerdo con el mismo programa, procurará su apoyo para ingresar a programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reincisión (SIC) social y adopción a la normal vida cotidiana.</p>	<p><i>postulados en detención preventiva y de condenados a la pena alternativa.</i></p> <p>El Gobierno Nacional velará por la resocialización de los postulados mientras permanezcan privados de la libertad, y por la reintegración de aquellos que sean dejados en libertad por cumplimiento de la pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento.</p> <p>El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario diseñará y ejecutará un programa Especial para la resocialización de los postulados que se encuentren privados de la libertad en establecimientos penitenciarios o carcelarios. En estos casos, la finalidad de la detención preventiva incluirá la resocialización de los desmovilizados que hayan sido postulados por el Gobierno Nacional al proceso penal de que trata la presente ley y que se encuentren activos en el mismo. El programa de resocialización deberá incluir un componente de atención psico-social que les permita a los postulados participar de manera efectiva en los procesos penales especiales de justicia y paz.</p> <p>La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas, diseñará e implementará en el marco de la política nacional de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas, un proceso de reintegración particular y diferenciado para los desmovilizados postulados a la presente ley que sean dejados en libertad, el cual tendrá como objetivo la contribución de estos postulados a la reconciliación nacional. Este programa de reintegración no estará supeditado a la prohibición establecida en el artículo 50 de la Ley 418 de 1997, y deberá incluir un componente de atención psico-social. Este programa en ningún caso podrá incluir la financiación de proyectos productivos.</p> <p>El proceso de reintegración será de carácter obligatorio para los desmovilizados Postulados al proceso de la presente ley.</p> <p>Para el desarrollo e implementación de la política nacional de reintegración de personas y grupos alzados en armas, el fortalecimiento institucional y en general para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, podrá adelantar alianzas, suscribir convenios y celebrar</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>contratos con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.</p> <p>El Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, determinará y adoptará las medidas de protección para los postulados a la presente ley que quedaren en libertad por cumplimiento de la pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento, previo estudio del nivel de riesgo y de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, con el fin de garantizar su proceso de reintegración. Parágrafo. Para efectos de las disposiciones contenidas en el presente artículo, el gobierno Nacional realizará los ajustes y las apropiaciones presupuesta las necesarias durante las respectivas vigencias fiscales.</p>
<p>Artículo 67, 68 y 69... <b>sin modificación.</b> Vigencia y Disposiciones Complementarias.</p>	
<p>Artículo 70... <b>sin modificación.</b> Rebaja de Penas.(Inexequible)</p>	
<p>Artículo 71... <b>sin modificación.</b> Sedición.(Inexequible)</p>	
<p>Artículo 72... <b>sin modificación.</b> La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. <u>Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia.</u></p>	<p>Artículo 36. Modifíquese el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 72. <i>Vigencia, derogatorias y ámbito de aplicación temporal.</i></p> <p>La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de su promulgación. <u>Para el caso de desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno Nacional, la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su desmovilización. En relación con los desmovilizados individuales, es decir, aquellos cuyo acto de desmovilización sea certificado por el Comité Operativo para la Dejaración de las Armas(CODA), el procedimiento y los beneficios consagrados en esta ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su desmovilización y en todo case con anterioridad al 31 de diciembre de 2012.</u></p>
	<b>OTRAS DISPOSICIONES</b>
	<p>Artículo 37. Postulación de desmovilizados al procedimiento penal especial Quienes se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la vigencia de la presente Ley y pretendan acceder a los beneficios consagrados en la Ley975 de 2005, deberán solicitar su postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012.</p>





Ley 975 de 2005	Ley 1592 de 2012
	<p>Vencido este plazo el Gobierno Nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación. Quienes se desmovilicen de manera individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un (1) año contado a partir de su desmovilización para solicitar su postulación al proceso del que trata la Ley 975 de 2005, y el gobierno tendrá un (1) año a partir de la solicitud para decidir sobre su postulación.</p>
	<p>Artículo 38. Trámite excepcional de restitución de tierras en el marco de la ley ' 975 de 2005. Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de restitución en el marco de procedimiento de la Ley 975 de 2005, la autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará la dispuesto en la ley 1448 de 2011.</p>
	<p>Artículo 39. Restitución de bienes y cancelación de títulos y registros obtenidos en forma fraudulenta. Cuando se configure la situación excepcional de que trata el artículo 38 anterior, el Magistrado con funciones de control de garantías, en audiencia preliminar, surtirá el trámite de restitución bajo las siguientes reglas:</p> <p>Para decidir sobre la restitución de los bienes despojados o abandonados forzosamente y la cancelación de los títulos y los registros fraudulentos, el Magistrado con funciones de control de garantías dispondrá el trámite de un incidente que se surtirá de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 17C de la Ley 975 de 2005, para garantizar el ejercicio del derecho de contradicción y oposición de los terceros afectados, quienes deberán demostrar su buena fe exenta de culpa. En caso de que los terceros logren acreditar su buena fe exenta de culpa, el Magistrado ordenará en su favor el pago de las compensaciones previstas en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011, con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.</p>

